

EL ESCORPIÓN Y SU NATURALEZA

EL LASTRE ESTRUCTURAL EN LA LÓGICA DE LA BURGUESÍA BRASILEÑA

THE SCORPION AND ITS NATURE: THE STRUCTURAL BALLAST
IN THE LOGIC OF THE BRAZILIAN BOURGEOISIE

Hernán Ramírez¹

Palabras clave

Brasil,
Economía,
Burguesía,
Desarrollo,
Crisis

Recibido
15-12-2020
Aceptado
19-5-2022

Resumen

Durante las dos primeras décadas del presente siglo, Brasil experimentó una coyuntura clave respecto de su desarrollo, que parecía indicar una inflexión, con políticas que buscaban mudar sus estructuras –aunque de forma gradual, con pocas rupturas–, las que, extendidas en el tiempo, podían tener impacto profundo. Esto acumuló tensiones y desgastes, que serían aprovechados por fracciones burguesas refractarias a los cambios para llevar el nuevo modelo a un rápido colapso, abortando el incipiente vuelo verde y amarillo, para retornar al típico desarrollo dependiente y altamente concentrado del pasado. De modo similar a cincuenta años atrás, la clase dominante brasilera renunciaba a alcanzar estados superiores en su ciclo de metamorfosis, prefiriendo volver, como elección racional, a su condición inicial de subordinación al capital transnacional. Este artículo pretende develar esta lógica, apoyándose en un estudio panorámico de los recorridos que algunas de sus instituciones y agentes claves realizaron en ese período.

Key words

Brazil,
Economy,
Bourgeoisie,
Development,
Crisis

Received
15-12-2020
Accepted
19-5-2022

Abstract

During the first two decades of this century, Brazil experienced a key juncture regarding its development, which seemed to indicate an inflection, with policies that sought to change its structures –although gradually, with few ruptures–, which would be prominent over time. This reached a limit, accumulating tensions and wear and tear, which would be used by refractory bourgeois fractions to bring the new model to rapid collapse, returning to the dependent and highly concentrated development of the past. The abortion of the incipient green and yellow flight occurred by the impossibility of the bourgeoisie in contradicting its own nature. In a similar way to fifty years ago, that gave up reaching higher states in its metamorphosis cycle, preferring to return, as a rational choice, to his initial condition. This article aims to unravel that logic, based on a panoramic study of the paths that some of its institutions and key agents had in that period.

1 Universidad de Vale do Rio dos Sinos / Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), Brasil. C.e.: hramirez1967@yahoo.com.

INTRODUCCIÓN

Tras las elecciones de 2002, un tornero mecánico llegaba a la presidencia de Brasil. Por primera vez en siglos, un individuo perteneciente a los estratos populares asumía el cargo más alto del poder, no sin antes transitar por un extenso camino previo, en el que limó sus aristas más puntiagudas a los ojos burgueses como condición para alcanzar esa proeza. El corolario de tal transfiguración fue la Carta al pueblo brasileño,² compromiso que asumía con la burguesía respecto de que sus ímpetus se habían morderado, lo que refrendaba al nominar a José Alencar como su compañero de fórmula, un *self-made man* textil, afiliado a posiciones de centro.

Ya durante la composición de su gobierno, otras señales fueron emitidas para que el todo poderoso mercado le diera su venia. Dos fueron las figuras que fungieron para ese papel a la perfección, Antônio Palocci, médico que pertenecía a los cuadros del Partido de los Trabajadores (PT), devenido ministro de Economía, y Henrique Meirelles, primer extranjero en dirigir un gran banco en los Estados Unidos, elevado a presidente del Banco Central. Los dos actuaron como garantes de ese compromiso, quedando en puestos menos relevantes otros técnicos con perfiles más desarrollistas, posiciones que aún asustaban a los operadores bursátiles.

Durante su mandato, todo ello se consolidaría. Lejos de las políticas de irresponsabilidad fiscal que habitualmente se endilgan a posiciones de izquierda, tachadas de populistas, las suyas se encuadraron en el respeto a las directrices que estipulaban un trípode macroeconómico. Éste se basaba en un tipo de cambio flotante y metas fiscales y de inflación, canonizado por el *mainstream* como el más saludable, aun a regañadientes de críticas de sectores internos del partido, que vislumbraban la posibilidad de ser más creativos y pugnaban por políticas más activas.

Así, Brasil enfrentaría la crisis de 2008 con mucha solidez, comandando Lula el optimismo ante el *crash* mundial, el que auguraba que por playas locales no representaría nada más que una *marolinha* (olita). Este vaticinio sería confirmado por los hechos, ya que poco se hicieron sentir sus efectos, pues se había conseguido crear un círculo de crecimiento propio, basado en el mercado interno y en haber mejorado las condiciones de la deuda pública durante el período de bonanza, lo que permitió usar la brecha que posibilitan las políticas anticíclicas para campear el atolladero mundial sin grandes estremecimientos.

De todos modos, si bien en esos frentes las políticas fueron tímidas y complacientes con los deseos del *establishment*, la osadía se dio en recomponer el carácter industrial como motor de crecimiento y se reubicó al país con un nuevo papel dentro del mapa mundial, no sólo como de receptor de inversiones, sino disputando mercados en el exterior, en regiones donde antes no lo hacía o donde sus acciones eran más limitadas, lo que en largo plazo revertirían condiciones estructurales.

2 Tal documento fue leído el 22 de junio de 2002; en él Lula garantizaba el cumplimiento de los contratos nacionales e internacionales asumidos.

Además de la consabida distribución de renta –promovida en particular a través del programa Bolsa Familia–,³ así como de otros instrumentos que buscaban llevar desarrollo a los desposeídos estructurales, especialmente del interior –como los de provisión de energía y cisternas–, recursos mínimos en cualquier revolución capitalista, que revigorizaron el alicaído mercado interno, hubo un consistente esfuerzo por reforzar ciertos ramos industriales promoviendo el consumo de masas de sectores medios bajos, lo que generaría encadenamientos virtuosos, para así ganar dinamismo y escala. Para ello se movilizó la estructura estatal, especialmente a través de líneas de financiamiento de bancos de fomento y oficiales, y se utilizaron políticas de desgravación impositiva, que favorecieron la construcción civil, automovilística, de línea blanca y hasta de muebles para el hogar, generando un clima de bonanza.

También un ambicioso plan de expansión de obras públicas fue puesto en marcha, bautizado como Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que se inició en 2007 y tendría dos ediciones, la primera durante la gestión de Lula y la segunda bajo la de Dilma Rousseff, que fue su conductora cuando ministra del primero. Éste seguía moldes más o menos parecidos a los de sus antecesores de la época del desarrollismo, con énfasis en la corrección de distorsiones regionales, como fue el PAC de las Ciudades Históricas o de Agua y Luz Para Todos. Igualmente, hubo una apuesta a introducir cambios en la matriz energética, aun cuando se continuaba apostando a la producción hídrica, así como mejorar vías de comunicación y de flujo de la producción, entre las metas más ambiciosas.

Nada enteramente nuevo parecía estar en juego, mucho se parecía a un retorno remozado a la vieja idea desarrollista de que el destino de América Latina y, en este caso, Brasil no se resumía en el de productor de bienes primarios sin industrializar, por lo cual el primer paso fue el de agregar valor a las producciones agropecuaria y minera. Más fácil era lo primero y un tanto más complicado lo segundo, lo que tomó otro ritmo ante el fantástico descubrimiento de gigantescas reservas de petróleo en napas muy profundas.

Es bastante conocido el efecto multiplicador que ejerce la industria petrolífera en la economía –por lo que no abundaré en mayores detalles–, lo que fue aprovechado por la política lulista, en especial mediante el poder de compra ejercido por Petrobras, particularmente equipamientos de alta ingeniería, así como la posibilidad que se abría con la refinación, antes externalizada, en las que Brasil había tenido protagonismo desde los tiempos de Vargas.

Con ello fue posible retomar la industrialización en sectores como la construcción naval –ya sea de barcos, sondas o plataformas–, que tiene un alto impacto, tanto en términos de empleo como de cuentas externas, pues en el largo plazo baja la dependencia tecnológica y, por ende, las remesas. Incluso produjo un fuerte impacto regio-

3 Programa implantado por Medida Provisoria en 2003, refrendada por ley en 2004, que unificaba y ampliaba considerablemente programas de transferencia de renta, importante salto cuantitativo que lo constituyó en uno de los instrumentos de mayor relieve en el mundo.

nal, al concentrarse en localidades determinadas, lo que permitió un verdadero *boom* en puntos antes deprimidos (Goularti 2013).

Así, de modo sintético, el modelo asumido por el PT se enmarca en un cambio de rumbo suave de la matriz neoliberal que se había profundizado a fines de los ochenta y, sobre todo, en los noventa. De todos modos, aún sin abandonar totalmente algunas de sus directrices, poco a poco la tendencia se invertía, en diversos sentidos. El primero en buscar un desarrollo más autónomo, sea de los dictámenes de los órganos internacionales de fomento como de los Estados Unidos, que otrora impusieron sus intereses de modo hegemónico. Igualmente, el desarrollo basado en los productos primarios y la financierización pasaba a tener un mayor sesgo industrial, en franco crecimiento, apostando a la emergencia, con auxilio estatal, de *players* globales basados en la economía real.

Sin demasiados exabruptos, pues se respetaban límites del déficit primario, hubo una fuerte inducción económica protagonizada por una política más activa de agentes financieros estatales, como el BNDES, el Banco do Brasil y la Caixa Econômica Federal, que incentivaron el consumo interno y, con ello, la demanda de bienes de consumo durable en gran escala. Igualmente, la audaz política internacional abrió las puertas para que muchas de esas empresas pudieran emprender una fuerte expansión también en el extranjero, especialmente en nichos de poco interés o reacios a los intereses norteamericanos, como África y América Latina.

El fortalecimiento del Estado como empresario fue fundamental en esa estrategia, usando varias estatales como propulsoras de crecimiento, el gobierno petista se dispuso revertir la matriz productiva local. Y el broche de oro estaba constituido por el desarrollo de nichos de muy alta tecnología, no sólo de petróleo, pues también se apuntó a la construcción de cazas supersónicos, con lo cual se potenciaba la floreciente industria de aviación de medio porte, desarrollar un submarino atómico y resucitar el programa aeroespacial, enviando el primer astronauta brasileño al espacio.

Consolidadas tales tendencias, Dilma Rousseff asumió imprimiendo un giro a tales políticas, las que se ha acordado en llamar de nueva matriz macroeconómica, un conjunto de directrices heterodoxas y de carácter desarrollista adoptadas a partir de 2011 que incluían la intervención en la economía, la que combinó una nueva política monetaria con reducción de la tasa de interés y fiscal, con una mayor orientación en la inversión, elevando gastos, concediendo subsidios e interviniendo tímidamente en los precios.

Si bien produjo resultados sorprendentes, como el de conseguir prácticamente el pleno empleo, con niveles cercanos a los mejores índices de países desarrollados, tal receta no agradó a los grupos empresariales más concentrados, los que, tras años de prédicas neoliberales, no veían con simpatía el creciente intervencionismo estatal y, por sobre todo, les incomodaba la fijación de tasas de interés, acostumbrados a un mercado donde éstas son desproporcionadas, lo que les garantiza *rent-seeking*s, cuasi rentas, nada despreciables.

Entonces, si Lula terminó con una gran aprobación y Dilma Rousseff transitó su primer mandato también con elevada popularidad, la gran pregunta que ronda y que uno se puede hacer es cuál sería el motivo que llevaba a la burguesía brasileña a bombardear un proyecto político que la favorecía. Y no fue poco lo que hizo, tanto para impedir su llegada como para desestabilizarlo cuando estuvo en el poder, demostrando siempre que, por más que la agradara, no era de sus preferencias. Por ello, no resulta tampoco una paradoja que apoyara más a la oposición, que había encabezado gobiernos que desembocaron en profundos retrocesos pero que veían como propios.

Hemos buscado la respuesta analizando algunos de los rasgos de su clase dominante, particularmente de su burguesía, que nos permiten entender mejor este fenómeno, no como una respuesta casual, de coyuntura, sino como algo más profundo, estructural. Tal explicación no se da a partir de un corpus teórico definido, sino más bien desde una perspectiva transparadigmática (Hirschmann y Santos 1970, Oszlak 2011) con la que edificamos nuestro argumento, a través de proposiciones provenientes de distintas vertientes de pensamiento, algunas concomitantes y otras que habitualmente han sido vistas como conflictivas, pero que aquí colaboran para elucidar nuestro principal interrogante.

DISECANDO NUESTRO ESPÉCIMEN

La burguesía brasileña, como tantas otras en América Latina, pero quizás más fuertemente que ellas, no fue gestada en una revolución, lo que fue clave para dejar incólume muchas de sus estructuras. Como señala Ricardo Costa de Oliveira (2018a) en sus investigaciones genealógicas, a grandes rasgos, la burguesía brasileña es heredera directa del régimen esclavista, conservando su *ethos* inclusive, que se plasma en diversas esferas y asume un carácter fuertemente estamental.

De este modo, el problema de la modernización brasileña es un asunto clásico, siendo Raimundo Faoro (1958) quien tal vez condensara sus críticas con mayor contundencia, al dejar al desnudo la naturaleza de los dueños del poder mostrando cómo ellos se nutren de esa dualidad. Tal tesis ha sido actualizada recientemente por Jessé de Souza (2017) con su concepto de elite del atraso, que usa para explicar la particular forma de manutención del poder por parte de su clase dominante, que tras una fachada de aspecto moderno, y hasta cosmopolita, esconde una sociedad jerárquica, que registra pocos quiebres desde la época colonial, lo que ha sido determinante para que no se desprendiera de sus lastres más pesados.

Otros también han planteado de modo metafórico este dualismo, Francisco Oliveira (2003) fue incisivo al realizar su crítica a la razón dualista que impera en Brasil, no sólo en las fuerzas que pretenden perpetuar su *statu quo*, sino que se traslada a aquellas que se proponen combatirlo, al proponer una comparación con el ornotorrico, pues existe una cierta semejanza con el simpático animal que se parece a una colcha de retazos darwiniana, en la que conviven elementos de distintas eras. En otras palabras,

Edmar Bacha (1974) lo simplificaría a su mínima expresión creando el híbrido Belindia, en el que Brasil resultaría un híbrido de Bélgica e India, con lo cual ejemplificaba la coexistencia de dos modelos distintos en un solo cuerpo social.

Desde el ámbito económico, podemos ver que su burguesía tuvo origen y tránsito paulatino desde las oligarquías agrarias, que buscaban de ese modo escapar al *corset* que le imponía su bien primario exportable (Lewis 1999), diversificando sus inversiones para sectores más elásticos, pero buscando siempre preservar esa fuente original, que actuaría como resguardo, el que también constituiría a su modo su *habitus* (Elias 1997 y Bourdieu 2021), es decir, una estructura comportamental.

Así, esta teoría sirve para explicar no sólo el surgimiento de la burguesía industrial, sino también que ésta lo hiciera atada a la renta agraria, lo que ha impedido conformar fracciones de clases distintas, ya que culturalmente éstas terminan por estar dentro de una misma clase más homogénea, aunque a veces pueda presentarse alguna diversificación en sus fuentes de ingresos. Igualmente, esto nos ayuda a entender los motivos para que el *ethos* burgués sea muy conservador, incluso en los individuos de origen burgués propiamente dicho, quienes ven en la propiedad agraria un símbolo de estatus. Todos ellos encuentran en la tierra un puerto seguro para sus inversiones de largo plazo y una señal de ascenso social, a la que aspiran como horizonte cuando enriquecen, así como son refractarios a ideas de modernización estructural.

De esta forma, no vemos fracciones burguesas diferentes; se encuentran umbilicalmente unidas, sea por un origen común o porque la pirámide de acumulación los aproxima. Esto no es exclusivo de la región; de hecho, en los países capitalistas avanzados la cúspide de la burguesía también entrelaza sus intereses, lo que aquí la distingue es que ello permea prácticamente todos sus estratos y que el rentismo termine por ser dominante. Este comportamiento se observa incluso en las asociaciones corporativas, las que, salvo en determinadas ocasiones, no han defendido intereses específicos propios y, en cambio, lo han hecho más bien en los de conjunto.

Esto se traslada igualmente a la representación política, en la que podemos observar cómo los intereses burgueses se han asociado más a partidos conservadores y de derecha, oponiéndose férreamente a los agrupamientos que defendían la modernización capitalista o intereses industriales estrictos, posiciones que pertenecían a perspectivas más de centro-izquierda. Tal vez ello ocurría en razón de que tales posiciones políticas consideran los intereses agrarios más recalitrantes como claves del atraso económico nacional y, de esta forma, la solidaridad intraburguesa terminaba por primar, abroquelándose en la defensa irrestricta de la propiedad.

Este panorama se observa claramente en la política concreta, pues, desde hace un tiempo y actualmente, en Brasil existen diferentes bancadas, como llaman al conjunto de diputados transpartidarios que defienden en el parlamento intereses específicos, que incluyen desde el buey, en referencia al agro, la bala, a los armamentistas, y hasta la Biblia, a los evangélicos, pero no hay ninguna que se rotule industrialista. Ello no implica que los intereses industriales no estén representados, sino que están diluidos y no

son predominantes, horizonte que se ha profundizado en la actual fase capitalista, en la que están muy supeditados a los intereses financieros, que se tornaron hegemónicos con el neoliberalismo.

Esto tal vez tenga origen en el particular desarrollo corporativo local (Jáuregui 2002), en el que las entidades representativas más fuertes son las estatales y no las nacionales. Y, por ser San Pablo la unidad federativa con mayor cantidad de industrias, la federación de industrias de tal estado (FIESP) termina por ser la de mayor relieve, actuando como vocera en representación general, o al menos en posición dominante, de los intereses burgueses de otras regiones, las que habitualmente se encuadran bajo su liderazgo.

Así, no es extraño que Paulo Skaf, que preside tal entidad, tuviera papel protagónico en el proceso que conduce a la crisis de legitimidad objeto de estudio, incluso usando su poderosa estructura, acción en la que desnuda muchos de los vicios de tal sistema corporativo. Más que representar intereses industriales genuinos en los aparatos políticos, lo que observamos es la primacía de sus causas particulares, personales si se quiere, como animal político propiamente dicho, antes que las corporativas de un sector, por lo cual su trayectoria no deja de ser sintomática.

Hijo de inmigrantes dedicados a la industria textil, continuó en el ramo, llegando a ser miembro conspicuo de algunas organizaciones que representaban las actividades de la confección. Después de dos décadas en la actividad, la abandonó para concentrar sus activos en inmuebles, lo que no fue impedimento para que ocupara la presidencia de la FIESP desde 2004 hasta 2021, cuando fue sucedido por Josué Gomes, otro empresario del sector textil, hijo del vicepresidente durante los dos mandatos de Lula.

Paralela a su acción corporativa, como representante de la industria sin tener industria, tuvo también carrera política, como afiliado al Partido Socialista Brasileño (PSB) desde 2008 a 2011, cuando por invitación del vicepresidente Michel Temer se mudaría al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), actual MDB. Recordemos que tal partido fue actor central del *impeachment* de Dilma Rousseff, con lo cual su incorporación afirmaba una alianza que sería vital para alcanzar tal objetivo, pues la burguesía fungió otro papel clave, incluso el hecho de mudar de nombre se dio para intentar limpiar o esconder esa imagen.

La FIESP, con Paulo Skaf al frente, lanzó en 2015 la campaña “No voy a pagar el pato”, que se popularizó con el uso de gigantescos patos inflables en distintos eventos, de masas o performáticos para crear clima, como el que depositó un ejemplar de grandes proporciones y otros cinco mil menores en la Esplanada de los Ministérios, de Brasilia, en 2016. Estas acciones sirvieron para dar sustento a las protestas que crecían y que desembocaron en el pedido de *impeachment*. Su sede se transformó en un punto de concentración y hasta llegó a dar refecciones gratuitas a muchos líderes en sus instalaciones, particularmente a los del joven Movimiento Brasil Libre (MBL), que llegó a instalar un campamento en sus puertas (Miranda 2021). Igualmente, su emblemático edificio fue iluminado alusivamente con *slogans* antigubernamentales, demostrando con ello el peso de la adhesión de su dirección y sus bases.

Así como en 1964, tal vez con menos pudor, las entidades burguesas se empeñaron de cuerpo y alma en la acción desestabilizadora, sea directa o indirecta, en varios de sus campos de actuación –que abarcan de lo económico a lo social, pasando por lo político e ideológico en sentido amplio–, aplicó su poder de mercado como hacía tiempo no lo hacía, generando índices desastrosos en cuanto a inflación y cotización de la Bolsa, que son los más volubles a su humor cotidiano. Es allí, como Albert O. Hirschman (1985) nos enseñara, que los poderosos ejercen su más fuerte poder voto, promoviendo crisis cuando los gobernantes de turno no se ajustan o sus predicados; aplicaban con ello su terapia del *shock*, como a ella se refiriera Naomi Klein (2007).

Ello no implica que no hubo industriales próximos al Partido de los Trabajadores, pero eran voces minoritarias y, casi siempre, fracasaron en el intento de consolidar esa brecha dentro de la burguesía, sea industrial o en sentido amplio. Por ejemplo, Armando Monteiro, presidente de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), cargo al que ascendió después de estar al frente en distintas oportunidades de la Federación de Industrias del Estado de Pernambuco (FIEPE), asumió el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior cuando en diciembre de 2015 Dilma Rousseff tuvo que reorganizar su gabinete en vista de luchar contra el *impeachment*.

Otra figura del mundo empresarial clave, aunque no industrial sino del agro, fue Katia Abreu, ministra de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Dilma Rousseff hasta finalizar su mandato. Anteriormente había sido presidente de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), de 2008 a 2011, y también perteneció al PMDB, por lo que haber permanecido fiel a Dilma Rousseff le costó un proceso de expulsión, migrando al Partido Democrático Laborista (PDT), donde llegó a ser candidata a vicepresidenta en la fórmula con Ciro Gomes, político de tintes desarrollistas, y después al Partido Progresista (PP), la agrupación que mejor aglutina los intereses del agro, muy conservadora.

Pero no sólo instituciones corporativas en sentido estricto jugaron ese rol protagónico, también clubes de elite y *think tanks*, que en su amplia mayoría siguen la cartilla neoliberal, se enfrascaron directa o indirectamente en esa contienda, entre los cuales destacamos el Grupo de Líderes Empresariales (LIDE), que tuvo tal vez el papel más descollante, sobre todo por sus lazos políticos con la oposición, principalmente el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que fue proa del pedido de *impeachment*. Éste fue fundado y conducido por João Doria Junior, quien, además de empresario, es un importante político, fue intendente de la ciudad de San Pablo desde donde escaló meteóricamente al cargo de gobernador del estado de la cual ella es capital. El Grupo no es una corporación ni un *think tank* productor de conocimiento, asemejándose más a un club de millonarios, pues congrega las principales fortunas, llevando adelante una serie de actividades de exposición pública con la cual da fuerza a figuras e ideas.

De tales ideas se destaca el vehemente apoyo que dió a la Operación Lava Jato, con varias conferencias y premiaciones concedidas al exjuez Sérgio Moro y el fiscal Del-

tan Dallagnol, sus dos figuras más emblemáticas, las que coinciden con una seguidilla de condecoraciones con la que el *establishment* los agraciaba por los servicios prestados. De todas ellas, la más polémica ha sido aquella en la que el primero fue fotografiado sonriente junto a Aécio Neves, candidato derrotado por Dilma Rousseff y que no reconociera el resultado del pleito electoral, acusado de corrupción, en especial por la construcción de un centro cívico cuando fue gobernador de Minas Gerais y otros usos particulares de patrimonio público.

Haberle franqueado con solemnidad las puertas de los altos ruedos a los actores centrales de la Lava Jato, inclusive en el exterior, daba a la operación aires de mayor grandeza y la hacía inmune a las dudas que flotaban acerca de sus conductas, como las de codearse con políticos de signo contrario. Esto ha llevado a varios investigadores a sumergirse en análisis que muestran cómo el reclutamiento dentro de la justicia se condice a rajatabla con el de la estructura de tal sociedad estamental. Así lo advierte Ricardo Costa de Oliveira (2018b) estudiando la composición de los jueces paranaenses, estado de origen de la Operación Lava Jato, en especial del Tribunal Federal Regional 4 (TFR-4), que juzgara a Lula en segunda instancia, en cuyo proceso sobresalieron algunos puntos notables que levantaron suspicacias, como la extraordinaria celeridad con la que corrió, a tiempo para impugnar su candidatura, la ampliación de la condena de la primera instancia, para burlar la prescripción, y la unanimidad en un juicio sumamente complejo, para no dar margen a demasiados recursos y así consolidar cuanto antes la sentencia.

De todos modos, los juicios de la Operación Lava Jato contra Lula fueron anulados en la máxima instancia, el Superior Tribunal Federal (STF) de forma contundente, no sólo por las revelaciones de los mensajes en aplicaciones fuera de los canales oficiales, sino también por una serie de inconsistencias bastantes elementales, como la de no respetar los límites jurisdiccionales, confiar excesivamente en delaciones de criminales que coaccionados se libraban de pesadas condenas, no tipificarse claramente crímenes o una abierta promiscuidad entre el juez y los fiscales (Proner *et al.* 2021).

Sin embargo, lo que aún no queda claro es la motivación que los llevó a tal resultado, si fue el simple afán de combatir la corrupción endémica en Brasil, como muestra el tal vez megalómano artículo publicado por Sérgio Moro en 2004, o por razones de índole política, las cuales podrían variar entre el contubernio liso y llano a otras relaciones más sutiles, por las cuales los agentes de la ley son conducidos en determinadas direcciones, por formación profesional o pertenecer a un determinado grupo social, con el cual comparten una misma cosmovisión, que influye en su estructura de decisiones.

Como ocurría con los empresarios, algunas voces minoritarias dentro de la justicia plantearon objeciones –como el caso de Teori Zavascki, juez relator en el STF que calificó de medievales los procedimientos de la Operación Lava Jato, en particular las demoradas prisiones preventivas– o que la contradijeron con sus acciones en momentos claves –como lo hizo Rogerio Favreto, camarista del mismo TFR4, que liberó a Lula después de un pedido de un comité de la ONU, decisión que no fue cumplida por la Policía Federal, que esperó disposiciones superiores, que también presentaron una se-

rie de regularidades, como la del juez Moro de despachar en vacaciones o que otro camarista, João Pedro Gebran Neto, no el plenario del Tribunal, suspendiera tal decisión, ilegalidades que fueron convalidadas por el STF, que siempre asumía un papel pasivo.

Vemos, de este modo, que la burguesía actuaba como articuladora de otras fuerzas –como lo había hecho en la coyuntura que desembocó en el golpe de Estado de 1964–, las cuales englobaron también los segmentos militares, que actuaron como gendarmes para dar sustento a esas acciones de excepción, como queda claramente demostrado en las propias declaraciones del general Eduardo Villas Bôas, en esa época comandante de las Fuerzas Armadas, que en un libro reciente de memorias se vanagloriaba de haber sido el garante de la prisión de Lula (Castro 2021).

CAMINO AL DESENLACE

Desprendido de lo anterior, vemos que las causas que condujeron a la coyuntura que concluiría con la deposición de Dilma Rousseff son variadas y complejas; de todos modos, la mayoría de ellas parecían apuntar a lo que en la jerga de los medios se conoce como una tormenta perfecta, es decir, donde distintas variables confluyen para provocar un fenómeno negativo inexorable.

Desde junio de 2013, se sucedieron distintas movilizaciones estudiantiles protagonizadas por el Movimiento Pase Libre, una típica organización de izquierda que reivindica mejoras –como el acceso a pasajes más baratos o exentos–, la que entraría en confrontación con las fuerzas policiales, particularmente en San Pablo, usadas por la oposición para generar un clima contrario al gobierno municipal, pues el ejecutivo paulista estaba comandado por Fernando Haddad, exministro de Lula, y también por elevación al federal, con Dilma Rousseff. En menor medida, se veía afectado el gobernador del estado, Geraldo Alckmin, del PSDB, que, al quedar en el medio, podía desentenderse mejor del problema, a pesar de que el metro es operado por una compañía estadual, cabiéndole también responsabilidad en el precio de los referidos pasajes.

De poca expresión y de tinte izquierdista, estas manifestaciones callejeras dieron un vuelco con las revelaciones que comenzaron a salir a la luz de la Operación Lava Jato, consolidada en 2014 a partir de causas anticorrupción abiertas antes. Pronto, la opinión pública se vio inundada de noticias que alcanzaban al gobierno, que traían a la memoria como reminiscencia el escándalo del Mensalão, que había alcanzado de lleno al Partido de los Trabajadores en 2005.

Fue en ese momento que las acciones de la Fuerza de Tareas ganaron musculatura, alcanzando empresas de gran porte, como la semiestatal Petrobras y varias constructoras, lo que generó páginas y horas en los medios de noticias que promovieron el caldo de cultivo para que las protestas que habían iniciado por una vía rápidamente se movieran a su mano contraria.

Hábilmente, el discurso anticorrupción ganó ribetes inusitados, oponiéndose inclusive a dos eventos de gran porte que se aproximaban, la Copa Mundial de Fútbol, a

realizarse en 2014, y la Olimpíadas de Rio de Janeiro, en 2016. Valiéndose del argumento de que se podían costear eventos superfluos con recursos públicos existiendo otras prioridades –como salud y educación– insuficientemente atendidas, la oposición consiguió movilizar una masa considerable, en especial capas medias que comenzaban a inquietarse y volvían a politizarse, sobre la base de un discurso fuertemente moralista, para lo cual las acciones judiciales calzaban como un guante.

No es posible afirmar con claridad las intenciones que corrieron tras esas acciones, si fue un deseo genuino de acabar con una pústula recalcitrante en la historia brasileña o la instrumentalización de la justicia con motivos políticos, lo que se ha acordado en llamar recientemente como *lawfare* (Kittrie 2016), que en Brasil fue usado como concepto central de la defensa de Lula (Martins *et al.* 2019).

Lo cierto es que, a través de tal práctica, se buscó anular al adversario con el uso masivo de acciones judiciales, que lo obligaban a dedicarse a la defensa, abandonando prácticamente todos los otros frentes, lo que genera una parálisis cuando se es gobierno, y también provocaban graves daños en la imagen de los que la sufren, ya que entre la denuncia y el sobreseimiento definitivo hay una enorme distancia temporal, en la que la sociedad absorbe la culpabilidad como cierta, porque generalmente esto se acompaña de una fuerte acción mediática, como lo fue en este caso, con lo cual los grandes medios burgueses lo masacraron (Feres y Sassara 2016).

Estos hechos, agravados por el uso que se hizo de las instituciones estatales con ese propósito, sin que éstas erigieran un contrapeso, permite a algunos entender que se trató de un verdadero estado de excepción (Valim 2017), en el que hasta la letra de la ley era modificada para alcanzar el objetivo pretendido, como se lo hizo con la modificación de la prisión después del tránsito en juzgado establecida en la Constitución como cláusula pétrea, que pasó a aplicarse ya en la segunda instancia. Esto motivó una situación inaudita, pues un juzgado de primera instancia sentaba jurisprudencia en rebeldía con la Carta Magna y las instancias superiores, que se ajustaban temiendo el bombardeo mediático que sufrirían en caso contrario.

Tal clima erosionaba las posiciones del Partido de los Trabajadores, especialmente las de Dilma Rousseff, la que tenía, a pesar de su pasado en fuerzas guerrilleras, un perfil más tecnocrático que político. De hecho, desde Lula los gobiernos habían primado por la inclusión vía consumo y no por medio de la politización de masas, lo que no generaba masa crítica para oponerse al ataque cerrado al que ahora se enfrentaban, marcado por André Singer (2012) como uno de los límites del lulismo. Sin embargo, por el momento, la oposición no alcanzó el éxito total y la presidente fue reelegido por un apretado guarismo.

De todos modos, tal resultado no los desalentó, y Aécio por primera vez impugnó un resultado electoral, profundizando con ello la crisis que ya se extendía por el sistema político y comenzaba a contaminar lo económico, pues los intereses en pugna también aprovecharon la debilidad de la presidenta reconducida al cargo, la que había imprimido tendencias que los contrariaban. En particular cuestionaban mantener un

ministro como Guido Mantega, de raíz desarrollista, y apuntar hacia una baja de los intereses de la deuda interna, lo que afectaba los rendimientos rentistas. Éstos han actuado como antivaleores (Oliveira 1998), una fuente de *rent-seekings* (Krueger 1974) que defienden, en especial porque son poco propensos a la innovación. Este grupo que posee un poder inmenso, dado el proceso de financierización mundial por el que devino clave en el actual modelo de acumulación capitalista.

Para peor, los efectos de la Operación Lava Jato fueron calamitosos, sus acciones terminaron desestabilizando –y en algunos casos desarticulando– sectores productivos enteros, como el petrolero y de la construcción civil y naval, algo que varios intelectuales sospechan era de interés de los Estados Unidos, país que había recibido sus figuras claves, como Moro y Dallagnol, para darles entrenamiento, deseosos de aplacar el vuelo autónomo que Brasil venía teniendo, que le quitaba espacio, al avanzar sobre América Latina y mercados en África.

De hecho, al afectar la producción de petróleo, con el posterior cambio de la política de compras y de refinamiento, así como la construcción civil, también duramente golpeada, con crecientes dificultades de las empresas, en especial en sus ramos en el exterior, Brasil entró rápidamente en un creciente espiral crítico. Los índices de desempleo que habían caído a un piso histórico, aumentaron entonces, así como los índices de inflación, lo que incomodó nuevamente a los sectores asalariados.

Ello llevó a la rápida sustitución de Guido Mantega y un giro en la política económica, imponiéndole al mercado el nombre de Joaquim Levy, un gerente de banco alineado con posiciones neoliberales que se había desempeñado como Secretario del Tesoro durante el mandato de Antônio Palocci como ministro de Economía.

Igualmente, al difuminarse el pavor causado provocado por la Operación en el mundo político que se había constituido en la periferia del gobierno petista, ello alertó a la clase dirigente, cuyas prácticas habituales incluían el uso de métodos *non sanctos*, las que comenzaron a culpar a Dilma Rousseff por dejar a la Operación Lava Jato correr suelta. La presidenta creía que el libre juego institucional bajo métodos republicanos resolvería la ecuación, porque si bien pocas figuras de su gobierno y ella misma estuvieron involucradas, de todos modos, aún así padecieron sus consecuencias por su pasividad.

En determinado punto, su propio partido reclamaba por su inapetencia en defenderse y no confiar excesivamente en prácticas republicanas, sometido a una cerrada táctica de *lawfare*, en especial sobre Lula, su gran figura, de la que ya le era casi imposible escapar. Se anunciaba allí la recta final, que vendría con el pedido de *impeachment*, por justificaciones bastante triviales, al condenársele un supuesto crimen, del que posteriormente sería absuelta, que no era más que una práctica común en todos los mandatos presidenciales anteriores, argumento que resultó ineficiente para frenarlo.

El juicio político fue abierto a finales de 2015, como método para estancar la sangría, modo en que conspicuos políticos corruptos se refirieron al pacto que se tramaba

como un acuerdo hacia adelante,⁴ y a partir de allí todos los intentos para detener su desenlace fracasaron, incluso porque también fueron minadas institucionalmente las legítimas posibilidades de reacción.

El gobierno pretendió dar un vuelco en la política económica, cambiando a Joaquim Levy por Nelson Barbosa, de perfil desarrollista, con el propósito de implementar medidas más populares, y, como última carta, Lula cedió en asumir la Casa Civil, que en Brasil funge como virtual comando ministerial, con lo cual se pretendía reorganizar la articulación política, en especial dentro del Congreso, donde Dilma Rousseff siempre había sufrido dificultades, por no tener juego de cintura, gozando de la fama de una mujer autoritaria y que se escudaba en su frío perfil técnico. De todas formas, la pretensión de reconstituir el gobierno fue deshecha al momento que el exjuez Sérgio Moro expuso públicamente la charla telefónica entre los dos, tras una interceptación ilegal, pues personas como la presidenta tienen fueros privilegiados y sus secretos telefónicos no pueden ser abiertos por la primera instancia.

Finalmente, Lula no pudo asumir como ministro, por decisión de Gilmar Mendes, juez de la Suprema Corte, que frenó la decisión liminarmente, alegando para ello que se pretendía usar tal condición expediente para burlar la investigación, pues de esa forma Lula pasaría a tener también fuero privilegiado. De todos modos, tampoco había amparo legal para tal decisión, pues el expresidente reunía todas las condiciones para asumir el cargo, al no tener aún ninguna condena, razón por la cual nunca fue analizado su mérito. Así, en un clima de crisis económica y de enrarecimiento político, el resultado en los seis meses siguiente no podía ser otro que el de dar curso al *impeachment* de Dilma Rousseff, que se confirmaría el 31 de agosto de 2016, propinando una gran debacle del partido gobernante que culminaría con la prisión del expresidente Lula en 2018.

ESBOZO DE INTERPRETACIÓN

Ciertamente, un acontecimiento de esa magnitud no admite una respuesta sencilla, por lo cual será necesario dar un gran rodeo, tanto teórico, para encontrar las herramientas adecuadas, como en cuanto al análisis histórico, pues el caso brasileño tiene particularidades que precisan ser comprendidas en una perspectiva de muy larga duración.

Pierre Clastres (2008) sustentó una de las tesis antropológicas más interesantes al observar que algunas sociedades se negaban a tener Estados, para lo cual elaboraban sofisticados mecanismos de destrucción regular del excedente, condición que les permitía alcanzar tal estadio. Esa era una estrategia que puede ser incomprensible desde un punto de vista centrado en la acumulación, pero no desde otro con eje en su metaestabilidad (Simondon 1989), la que tal vez sea más común de lo que presuponemos, pudiendo incluso ser pasible de traslado a comunidades divididas en clases.

4 La expresión fue proferida por Romero Jucá, exsenador y ministro de Michel Temer en marzo de 2016, revelada por la *Folha de S. Paulo*, el 23 de mayo de ese año.

Lejos de ser irracional, tal comportamiento obedecería a una lógica, la de preservación de un modo de vida dado, que sería alterado por la emergencia de un elemento disruptivo, como el Estado, que de esa forma se aborta al eliminar su condición previa. Sin él, las posibilidades de cambio son aniquiladas. Así, la dilapidación del excedente se convierte en algo virtuoso para la comunidad, pues garantiza a ésta su permanencia en el largo plazo sin transformaciones significativas.

En una transpolación para sociedades no segmentarias, ese tipo de comportamiento no estaría centrado en evitar que el Estado surja, pues el mismo ya existe, sino para que cambios más abruptos y no deseados sean inhibidos o, por lo menos, retardados, con lo cual la conservación del modo de vida estaría garantizada, tesis que el marxismo aplicó durante mucho tiempo a lo que llamó el modo de producción asiático (Godelier 1969), pero que está presente en muchas otras sociedades.

Tanto en la Torá como la Biblia está especificado el carácter teológico del Yobet, o Jubileo, el que establecía un periodo de siete años, tras lo cual se dejaba descansar la tierra, se libertaba los esclavos y se perdonaban las deudas, concluyendo con un período extraordinario al completar siete ciclos, en el que se procedía al rescate de la propiedad, una suerte de reforma agraria, lo que habría garantizado por algún tiempo una sociedad más homogénea, perdiendo su sentido con el tiempo.

Por ello, esos y otros comportamientos un tanto incomprensibles han sido objeto de diversos abordajes en distintos períodos históricos, como el que nos propone Bernard Mandeville en su *Fábula de las Abejas* (2001), en donde ilustra casualmente sobre el carácter virtuoso del despilfarro y otros comportamientos vinculados al ocio, lo que también atrajo la mirada de Thorstein Veblen (2014), mostrando como ello se institucionalizaba, garantizando el poder a una elite perdularia, que puede ser asemejada a la rentista. De esta forma, como se ha visto anteriormente, esas conductas aparentemente enigmáticas desde la lógica del progreso, encuentran explicación desde otras, que nos ayudan a entender esos elaborados mecanismos, incluso institucionalizados y hasta sacralizados, por los cuales se frenan determinados desarrollos.

Así, el comportamiento que evidencia la burguesía brasileña, y que suele ser similar al de otras, por minar y tumbar gobiernos que impulsan medidas económicas que en tesis los favorecen, al igual que dar apoyo a otros proyectos políticos que irán en contra de sus intereses de largo plazo, parece tener algún sentido. Incluso haber bombardeado el esbozo de proyecto autónomo proyectado por el petismo no fue la primera vez en que ello se demostraba, ya que en el decurso histórico brasileño habría ocurrido al menos otra vez en un período no tan lejano.

Para resumir a grandes rasgos, en Brasil dos han sido los ciclos en los que hubo crecimiento con políticas de distribución de renta. Además de la coyuntura que se abrió en 2002, desde 1945 y hasta 1964 se dio un período parecido, en el que paralelamente se apuntaba a un desarrollo más autónomo, con un ambicioso programa de desarrollo interno, que llevó por nombre Reformas de Base. De todos modos, ese primer ciclo también sufrió un proceso de ruptura similar al segundo, con la apertura de un pro-

ceso de deslegitimación en el que la burguesía tuvo papel destacado articulando otras fuerzas, el que culminaría con un golpe de Estado.

Después de analizar tal período, Francisco de Oliveira (2003) sustentó una tesis singular, afirmando que fue el éxito de los dichos populismos los que condujeron a su caída. Así como en varios eventos sociales y hasta del mundo natural, donde cumplir con su propósito lleva a la consecuencia decadencia, colapso o muerte, estos regímenes promovieron un cambio estructural que terminó por erosionar sus propias bases de apoyo. Y, si bien esto aplica a la etapa que concluye en 1964, que no por casualidad hemos adoptado como referencia comparativa, podemos transpolarlo a los hechos más recientes, cuando otra vez más un proyecto popular promovía cambios que acabaron por socavar sus propios cimientos

En primer lugar, ese éxito parece haber afectado el apoyo que amplios sectores le prestaron con anterioridad, como señala André Singer (2012), cuyo rechazo no se explica totalmente por el giro moralista en la sociedad brasileña, sino que habrían intervenido otros factores sociales. Hirschmann (1985) ha observado en su teoría de los dos carriles que los sectores medios tienden a mostrarse inconformes aún en coyunturas de juegos con suma superior a uno cuando los sectores populares reciben mayores beneficios, lo que acortaría las distancias sociales que lo separan, nuevo estado que vislumbran como potencialmente peligroso para su reproducción como clase, pues las fronteras que los separan tienden a diluirse.

En otros términos, Norbert Elias y John Scotson (2000) mostraron cómo pequeñas diferencias podían distanciar dos grupos muy próximos socialmente. Este fenómeno se observa en la rápida adhesión a las protestas por parte de estos segmentos anteriormente favorecidos por una serie de políticas petistas, los que pasaron a abrazar fuerzas políticas ajenas a sus causas, las que attentarían contra sus intereses en el mediano plazo.

Igualmente, los empresarios estaban preocupados ante la inminencia de perder algunas de sus *rent-seeking*s, en particular las abultadas tasas de interés y el dominio que habían ejercido en el mercado financiero, que estaban amenazados por la fuerte acción estatal y las nuevas orientaciones geopolíticas, que comprometían al capital dependiente asociado, que había ganado fuertes competidores, alentados por el auxilio de entes públicos, en una política de promoción que el *mainstream* condenaba.

Esto último se muestra claramente en el ataque que sufrieron empresas emblemáticas como Petrobras y Odebrecht, así como también otros proyectos que propugnaban por un desarrollo tecnológico autónomo, como fue el caso de dos importantes compras militares, que también entraron en la mira de la justicia, refiriéndonos al proyecto atómico y de cazas supersónicos. El primero estaba comandado por el vicealmirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, artífice contemporáneo del Programa Nuclear Paralelo, que llegó a presidir la Eletronuclear desde 2005 hasta 2015, cuando fue alejado por una causa judicial derivada de la Operación Lava Jato. Tal programa tenía la pretensión de desarrollar un submarino atómico de ataque, para lo cual se realizaría transferencia tecnológica por parte de Francia a una sociedad, acuerdo firmado en 2009, con el co-

mienzo de su construcción en 2012. La adquisición de los cazas constituye el segundo proyecto, por el que Lula también debió enfrentar otra causa que cuestionaba la elección de los aviones Gripen, de origen sueco, que vencieron una dura disputa contra los Rafale, de origen francés, y la Boeing, radicando la clave de tal decisión en la transferencia tecnológica, pues era intención brasileña dominar la experticia sobre los aviones ultrasónicos, habiendo consolidado mercado en otros segmentos con Embraer.

Por ello no resulta particularmente una novedad que Temer se apresurase en que tal empresa fuese vendida a la Boeing, en una operación poco convencional de fusión, que la transformaría en un mero taller de aviones, algo bastante fuera de propósito, pues la firma brasileña no sólo fabricaba, sino que disputaba con éxito mercados en los segmentos de aviones medios. Sin embargo, acabaría a la postre por malograrse, ya que la adquisición se dio en medio a severas dificultades de la empresa americana, agravados por en el contexto de la pandemia. Tras ello, Embraer volvió a tener control local e, incluso, venció nuevas licitaciones internacionales de gran porte.

Tal vez esta constatación nos ayude a entender una laguna en el desarrollo del episodio de la conducción coercitiva de Lula que tuvo lugar el 4 de marzo de 2016, cuando fue llevado desde São Bernardo do Campo hasta el aeropuerto de Congonhas, de la ciudad de San Pablo. Algunos indican que el destino final sería Curitiba, pero que alguien frenó su traslado, casualmente en un área controlada por la Fuerza Aérea, que tendría interés en que ello no aconteciera. Otros sugieren la hipótesis de que un juez del STF habría interferido, encontrándose casualmente en el lugar.

Esto nos conduce a la última de la gran paradoja, pues si bien los militares eran seducidos con esas compras, terminaron por oponerse a Dilma y sellaron el destino de Lula, mudanza de humores que muchos adjudican a la oposición a la instalación de la Comisión de la Verdad, la que tibiamente pasó a exponer los crímenes de lesa humanidad como asunto de Estado, sin grandes consecuencias prácticas, pero que incomodaba los estamentos superiores, en particular los que ya estaban en situación de retiro. Con ellos el círculo se cerraba, la conjunción de fuerzas sociales de oposición era incontenible, como la retaguardia del partido gobernante tambaleaba, no sólo por méritos de unos y otros, sino porque es incuestionable que en los golpes institucionales de nuevo tipo no hubo mucho respeto a los preceptos republicanos, usando una de las partes los resortes de poder para perseguir adversarios, torcer resultados electores y así apropiarse del poder (Soler y Prego 2019).

A GUISA DE CONCLUSIÓN

Siendo multicausales, los fenómenos sociales son producto de innumerables factores, difíciles de mensurar. De todos modos, un análisis panorámico permite percibir el tiempo denso que condensa en una dada coyuntura fuerzas que conducen a un mismo propósito, algo raro de suceder, incluso porque aquélla parecía ir en dirección contraria a la que se había transitado hasta muy poco antes.

Entonces, la gran pregunta que ronda en este espectacular giro tiene que ver necesariamente con los motivos que llevaron a que en ese preciso momento tal correlación mudara tan vertiginosamente. En ello radica la clave para comprender algo que hasta ahora no tiene respuesta, por lo menos desde una racionalidad lineal, que ve la historia como simple suceso progresivo de etapas, en el que no hay espacio para esos retrocesos.

Lo que este pasaje de la historia brasilera nos muestra, mucho más sabiendo que en épocas no tan remotas un proceso similar había tenido lugar, con consecuencias inclusive más profundas, es que su sociedad, como muchas otras de Latinoamérica, desarrolló un mecanismo sistémico de protección, que es activado por su clase dominante, burguesa, cuando lo cree necesario, pues forma parte de su genética, considerada aquí en términos sociológicos, defenderse de fuertes alteraciones estructurales.

A lo largo de cinco siglos de historia, siendo esto una constatación y no un determinismo, Brasil consolidó una sociedad desigual, con alta concentración de riquezas, en la que la modernidad ha convivido con la exclusión, la que, salvo casos puntuales, no había generado respuestas de superación lo suficientemente consistentes para erosionar tal estado. Ello conforma su metaestabilidad, es decir, su estado en el que se genera la termodinámica social que mejor preserva su modo ancestral de vida.

Por ello, las ideas o procesos que busquen alterar tal equilibrio serán tratados como nocivos, por más que puedan ser racionales desde otras experiencias históricas, los cuales serán a lo sumo tolerados cuando de sean grado moderado, como es el caso del gobierno de Lula, y combatidos al ser percibidos capaces de transponer ese umbral, lo que ocurrió en el mandato de Dilma Rousseff.

Contrariando las expectativas de largo plazo de la burguesía brasileña, el proyecto llevado adelante por el Partido de los Trabajadores generaría una transformación incremental, minando las bases sociales de la desigualdad a cuenta-gotas y no por medios revolucionarios, lo que de todos modos conduciría a un inexorable cambio estructural. Ya había propiciado un vertiginoso ascenso social, que después apuntó también al étnico y, por fin, los cambios económicos hacían vislumbrar un desenlace aún peor para los intereses estamentales, pues la matriz dependiente podría ser alterada.

A pesar de no haber roto frontalmente con el molde de pensamiento dominante, muchas veces una hojarasca para cubrir intereses materiales concretos, hubo a su modo un cambio sustancial, que estuvo dado principalmente por los nuevos horizontes estratégicos que el gobierno del Partido de los Trabajadores imprimió a los destinos del país, con una nueva geopolítica que incomodó a ciertos intereses externos y de sus aliados locales.

De seguir su curso, el modelo de acumulación sería transformado; como país continental, Brasil abandonaría su sujeción bilateral con los Estados Unidos, y su modelo de capitalismo, para transitar hacia una relación multilateral con otras naciones emergentes, con liderazgo en dos grandes regiones subdesarrolladas, como América Latina y África, apostando a la política inductora del Estado y a reindustrializar su economía a partir de ramas que incorporaron alta tecnología, con lo que podría revertirse la tradicional dependencia.

Ese también era un ejemplo dañoso a los intereses dependientes por la fuerza gravitacional que Brasil ejerce entre sus pares latinoamericanos, la que ahora ganaba mayor empuje, impulsando diversas acciones que buscaban obtener sinergias, por lo cual los ataques a tales políticas se enmarcan en la clara intención de abortar ese vuelo, pues sus consecuencias serían catastróficas, no sólo en Brasil sino en toda la región.

Para alcanzar tal objetivo, una vasta operación judicial y política fue montada. Valiéndose de métodos legales y otros no tan claros, la mayoría de los cuales aún se conserva en la penumbra, la burguesía brasileña consiguió primero estancar ese proceso, para proceder a una rápida reversión posterior, con lo cual la metaestabilidad social quedaba asegurada por un tiempo. El escorpión picaba más una vez, era su naturaleza.

BIBLIOGRAFÍA

- BACHA, E. L., 1974. Un economista y el rey de Belindia: una fábula para tecnócratas. *Cuadernos de Economía*, vol. 11, n° 33, pp. 60-64.
- BOURDIEU, P., 2021. *Sociologia geral: Habitus e campo. Curso no Collège de France (1982-1983)*. Rio de Janeiro: Vozes.
- CASTRO, C., 2021. *General Villas Bôas: conversa com o Comandante*. Rio de Janeiro: FGV Editora.
- CLASTRES, P., 2008. *La sociedad contra el estado*. La Plata: Terramar.
- ELIAS, N. & SCOTSON, J. L., 2000. *Os Estabelecidos e os Outsiders: Sociologia das Relações de Poder a Partir de uma Pequena Comunidade*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
- FAORO, R., 1958. *Os donos do Poder*. Rio de Janeiro: Editora Globo.
- FERES, J. JUNIOR & SASSARA, L. DE O., 2016. Corrupção, escândalos e a cobertura midiática da política. *Novos Estudos CEBRAP*, vol. 35, n.2, pp. 205-225.
- GODELIER, M., 1969. *Sobre el modo de producción asiático*. Barcelona: Martínez Roca.
- GOULARTI, A. Filho, 2013. A relação entre o desempenho da marinha mercante brasileira e o Balanço de Pagamentos 1985-2010. En: H. RAMÍREZ, *O neoliberalismo sul-americano em clave transnacional: enraizamento, apogeu e crise*. São Leopoldo: Edunisinos, pp. 252-274.
- HIRSCHMAN, A. O. & SANTOS, M. T. dos, 1970. La búsqueda de paradigmas como un impedimento a la comprensión. *Desarrollo Económico*, Vol. 10, n° 37, abril-junio, pp. 3-20.
- HIRSCHMAN, A. O., 1985. *De la economía a la política y más allá*. México: FCE.
- JÁUREGUI, A., 2002. *Empresarios y políticas de desarrollo en la Argentina y el Brasil 1920-1955*. Tesis de doctorado. Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
- KITTRIE, O. F., 2016. *Lawfare: Law as a Weapon of War*. Oxford: Oxford University Press.
- KLEIN, N., 2007. *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*. Toronto: Knopf Canada.
- KRUEGER, A., 1974. The Political Economy of the Rent-Seeking Society. *American Economic Review*, vol. 64, n° 3, pp. 291-303.
- LEWIS, C., 1999. Industry and Industrialization: What has been accomplished, what's needs to be done. In: III Congresso Brasileiro de História Econômica, IV Conferência de História de Empresas. Paraná: Universidade Federal de Paraná.
- MANDEVILLE, B., 2001. *La fábula de las abejas o los vicios privados hacen la prosperidad pública*. México: FCE.
- MARTINS, C. Z., MARTINS, V. T. Z. & VALIM, R., 2019. *Lawfare: uma introdução*. San Pablo: Editora Contracorrente.
- MIRANDA, J. E. B., 2021. A patrulha ideológica da burguesia: a atuação do partido Movimento Brasil Livre na construção do Golpe de 2016. Tesis de Doctorado. Marechal Cândido Rondón: UNIOESTE.

- MORO, S., 2004. Considerações sobre a Operação Mani Pulite. *Revista CEJ*, vol. 26, pp. 56-62.
- OLIVEIRA, F. DE, 1998. *Os direitos do antivalor: a economia política da hegemonia imperfeita*. Petrópolis: Vozes.
- OLIVEIRA, F. DE, 2003. *Crítica à razão dualista. O ornitorrinco*. San Pablo: Boitempo.
- OSZLAK, O., 2011. Falsos dilemas: micro-macro, teoría-caso, cuantitativo-cualitativo. En: C. WAINERMAN & R. SAUTU. *La trastienda de la investigación*. Buenos Aires: Editorial Manantial, pp. 83-113.
- OLIVEIRA, R. C. DE, 2018a. Genealogias Políticas do Judiciário. *NEP*, vol. 4, n° 1, pp. 317-330.
- OLIVEIRA, R. C. DE, 2018b. *Família Importa e Explica: Instituições políticas e parentesco no Brasil*. San Pablo: LiberArs.
- PRONER, C., CITTADINO, G., RICOBOM, G. & DORNELLES, J. R. W. (orgs), 2018. *Comentários a um acórdão anunciado. O processo Lula no TFR4*. São Paulo: Expressão Popular. Projeto Editorial Praxis.
- PRONER, C., CITTADINO, G., RICOBOM, G. & DORNELLES, J. R. W. (orgs), 2017. *Comentários a uma sentença anunciada. O processo Lula*. Bauru: Cana 6, Projeto Editorial Praxis.
- PRONER, C., STRECK, L., SANTOS, F. S. DOS & CARVALHO, M. A. (orgs.), 2021. *Livro das Parcialidades*. Rio de Janeiro: Editora Telha.
- SIMONDON, G., 1989. *L'individuation psychique et collective à la lumière des notions de forme, information, potentiel et metaestabilité*. Paris: Aubier.
- SINGER, A., 2012. *Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador*. San Pablo: Cia. das Letras.
- SOLER, L. & PREGO, F., 2019. Derechas y neogolpismo en América Latina. Una lectura comparada de Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2016). *Contemporánea*, vol. 11, n° 2, pp. 33-52.
- SOUZA, J., 2017. *A elite do atraso. Da escravidão à Lava Jato*. Rio de Janeiro: Leyra.
- VALIM, R., 2017. *Estado de exceção: a forma jurídica do neoliberalismo*. San Pablo: Contracorrente.
- VEBLEN, T., 2014. *Teoría de la clase ociosa*. Madrid: Alianza Editorial.